



RED POR UNA AMERICA LATINA
LIBRE DE TRANSGENICOS

BOLETÍN N° 348

AGRO Y NEOCOLONIALISMO

Javier Diez Canseco

Apoyados por sus gobiernos, grandes capitales extranjeros –ya no europeos o de EEUU, sino de países que apuntan a ser nuevas potencias neocoloniales- buscan el control de vastas tierras fértiles de países pobres en África, Asia y América Latina, contando con la complicidad de gobiernos neoliberales y corruptos. ¿Un intento de restablecer formas de dominación colonial y constituir nuevas “repúblicas bananeras” en pleno Siglo XXI, retrocediendo de las luchas de liberación nacional y la independencia de los viejos imperios coloniales conquistada hasta mediados del Siglo XX? Así lo advierten desde el diario Financial Times (FT) hasta el analista norteamericano James Petras en agudo análisis.

Si bien capitales de EEUU y Europa (Petras resalta Goldman Sachs y Blackstone de EEUU, Louis Dreyfuss de Países Bajos y Deutschbank de Alemania) están en la puja por controlar tierras y bosques, nuevos protagonistas entraron en escena. La corporación coreana Daewoo Logistics ha firmado un acuerdo (“rapaz” dice el FT) con Madagascar para controlar 1.3 millones de hectáreas (50% de la tierra cultivable de ese país), mientras que “Camboya negocia con países asiáticos y de medio oriente inversiones por US \$3,000 millones de dólares a cambio de la concesión de millones de hectáreas agrícolas”. Han entrado en esa lógica ricos regímenes petroleros árabes, especialmente Arabia Saudita y Kuwait dados los excedentes de los últimos años de altos precios, y nuevas potencias emergentes como China, Corea del Sur, Japón, India e Israel. Los árabes se concentran en el Asia del Sur y Sudeste; la China y los tigres asiáticos en África y América Latina; y los EEUU y la UE en Europa oriental, la ex URSS, AL y el África.

Hay 100,000 has. de tierra de empresas japonesas en Brasil para producir soya y maíz. China, en gran expansión mundial en las últimas décadas, compra tierras y fuentes de recursos naturales (minerales, petróleo, etc.) para proveerse de alimentos y materia prima. De Brasil se provee soya, y el arroz lo obtiene de Filipinas (1.4 millones de hectáreas), Uganda, Mozambique, Camerún, Burma y Laos -hasta Cuba- con decenas de miles de hectáreas. (En varios casos de la minería peruana -Majaz y Toromocho- se dan agudos conflictos con las comunidades, o con los trabajadores en Shougan-Marcona o la



petrolera en Talara.) Los países árabes del Golfo invertirán cerca de US \$1,000 millones en compras en el África.

A veces, el control se logra por ocupación militar (caso de Israel y Palestina). Otras, se negocian millones de hectáreas agrícolas en corruptos procesos de concesiones (como el "faenón" de León Alegría y sus amigos del gobierno), casi sin pago al país (aunque los gobernantes llenen sus cuentas bancarias) con simples promesas de inversión en infraestructura que sirve centralmente a la exportación de las corporaciones extranjeras. Se alienta la ilusión de los TLC y la exportación de los alimentos y productos agrarios, abandonando la lógica de la seguridad alimentaria nacional, las necesidades de la gente pobre hambrienta, mientras promueven dañinos monocultivos o uso indiscriminado de transgénicos, con un alto costo económico y social. El Banco Mundial financia este proceso: US \$1,400 millones de dólares para promover mercados "libres" de tierras y compras por agroindustrias.

Se excomulga toda discusión sobre la necesidad de una Reforma Agraria que garantice tierra a los millones sin tierra, que provea tecnología, créditos y uso adecuado de aguas, educación y salud rural, infraestructura (transporte, energía, almacenes), mercados y precios justos. Se santifica el "libre mercado de tierras", la "privatización del agua" y su manejo prioritario para grandes agroindustrias o minería. Se expulsa miles de pequeños propietarios. Se atropella o arrasa comunidades campesinas o nativas (como lo intentó García con los Decretos Legislativos que la lucha de las comunidades nativas derogó).

Se criminaliza a campesinos sin tierra que luchan por hacerse del instrumento fundamental para su supervivencia imponiéndoles trabajar por salarios miserables de \$1 a 3 dolares diarios, en condiciones laborales semiesclavistas, sin sindicatos o negociación colectiva (como ocurre en Ica y otras zonas del Perú). Ello abre un gran proceso de reconcentración y extranjerización de la propiedad de la tierra, como Fernando Eguren ha investigado, permitiendo que grupos como el Rodríguez Banda controle el Valle de Chicama con mas tierra que la nunca concentró un solo grupo, y que la inversión chilena en tierras sea cada vez mayor.

Con ello viene la concentración del crédito y de la ganancia, aumentando la polarización y la injusticia social.

La crisis mundial puede aguantar este proceso: sequía de créditos, parálisis de inversiones; crisis en las bolsas; caídas en los precios y ganancias. El Perú y AL deberían enfrentar este tema buscando sociedades más justas, un agro autocentrado, con menos pobreza y con una reforma agraria que democratice y desconcentre la propiedad de la tierra, promueva la seguridad alimentaria, cuide nuestro patrimonio genético y nuestra soberanía nacional. Este es parte del cambio de rumbo que AL y el Perú requieren.

La República, 08 de Diciembre de 2008

=====

LA TIERRA PARA QUIEN LA PAGA. PAÍSES EMERGENTES Y MULTINACIONALES SE ASEGURAN RESERVAS DE COMIDA COMPRANDO TERRENOS EN NACIONES



- Algunos Estados dictan leyes para protegerse

LALI CAMBRA 10/12/2008

Las ONG lo han bautizado como the last land grab, la última apropiación de la tierra. En el último año, con la confluencia de las crisis del precio de los alimentos y la financiera, se ha producido una carrera por parte de países ricos y corporaciones multinacionales por hacerse con tierra en estados latinoamericanos, asiáticos y africanos. Las naciones ricas, para asegurarse reservas de comida. Las corporaciones, para hacer negocio ahora que la Bolsa no rinde. El director general de la FAO, Jacques Diouf, ha alertado de que estas operaciones pueden calificarse de neocoloniales, y las ONG advierten de que los más perjudicados van a ser, como siempre, los más vulnerables -pequeños agricultores, pastores, tribus indígenas-, y cuestionan el impacto medioambiental de roturar nuevas tierras para cultivos intensivos con uso extensivo de pesticidas, herbicidas y abonos.

La FAO alerta de este neocolonialismo y de sus perjuicios medioambientales.

Paraguay se ha blindado con una norma que prohíbe vender a extranjeros

¿Cómo se calcula lo que reciben los nativos que pierden su modo de vida?

Ante las presiones, Paraguay ha aprobado una legislación que prohíbe la venta de tierras a extranjeros (después de que un campesino resultara muerto de un disparo de la policía cuando pretendía desalojarlo de la finca comprada por un brasileño para cultivar soja). Otros países suramericanos, como Uruguay, se lo están planteando, y Brasil está en proceso de cambiar su legislación para dotar de mayor transparencia y participación local a las operaciones con activos extranjeros.

Algo une a los países ricos en esta búsqueda de tierra foránea para alimentar a sus habitantes (entre otros, China, India, Japón, Malasia, Corea del Sur, Egipto, Libia y la gran mayoría de los países del golfo Pérsico): crecimiento económico acompañado del demográfico, pero falta de superficie agrícola o de agua. Todos ellos son importadores de comida. Todos se han visto afectados por la crisis de precios de los alimentos. "No tanto por los precios en sí, que pueden permitirse, pero sí por la actitud proteccionista de países productores que han limitado las exportaciones", explica David Hallam, responsable de Política Comercial de la FAO. "Argentina ha puesto controles, Tailandia también. Eso ha asustado a los importadores". De forma comprensible, pretenden asegurarse una reserva regular de alimentos. Más aún, cuando se prevé que, aunque los precios se han reducido relativamente en los últimos cuatro meses, van a continuar altos a medio plazo, y cuando se calcula que para 2050 la producción de alimentos va a tener que doblarse para satisfacer la demanda mundial.

Un informe de la FAO publicado ayer fija en 963 millones el número de personas hambrientas en el mundo a finales de 2007. La cifra, hoy, ya sobrepasará los mil millones, habida cuenta de que sólo en 2007 se crearon 40 millones de nuevos malnutridos, "un incremento tan dramático como rápido", según Diouf y que empeorará



con la eclosión de la crisis económica mundial.

Algo une también a los países que venden o alquilan sus tierras, (a bajo precio para los estándares de los ricos): la mayoría son pobres, requieren de inversiones y transferencia tecnológica y necesitan desesperadamente aumentar su producción agrícola. Y disponen de terreno. En teoría.

"Hay que ir con cuidado cuando se habla de tierra disponible o cuando los Gobiernos de países pobres hablan de espacios marginales o abandonados. Y es que la tierra se usa. Tal vez no bajo los parámetros occidentales de propiedad privada, pero se usa: por pastores que alimentan a su ganado de forma estacional, lo que permite la regeneración de la vegetación, por pequeños agricultores de forma comunal, por tribus indígenas sin títulos de propiedad...", explica Michael Taylor, portavoz de International Land Coalition. Es un paraguas de ONG e instituciones -la FAO entre ellas- que promueve el acceso a la tierra y sus recursos para reducir la pobreza y que recuerda que las necesidades de aumentar la producción alimentaria pueden ser cubiertas por los pequeños campesinos ayudados por políticas agrarias e inversiones adecuadas.

Uno de los casos más publicitados ha sido el de una empresa coreana que proyecta alquilar por 100 años la mitad de la tierra cultivable en Madagascar para plantar maíz que importar a Seúl. En la isla, más del 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y más de medio millón de personas recibe asistencia del Programa Mundial de Alimentos.

Taylor se muestra preocupado por el impacto en el medio ambiente del proyecto de la coreana Daewoo Logistics Corporation, en el suroeste de la isla, "una zona muy árida, pero extremadamente abundante en especies animales y flora". El portavoz de la coalición de ONG apunta asimismo que el proyecto, de consumarse, podría afectar a una tribu nómada de ganaderos, los Sakalava, "que ya son marginados, se les considera no civilizados y han visto su territorio reducido por la llegada de pequeños agricultores. ¿Cómo se les va a compensar?". La publicidad y el escándalo causado por la noticia del proyecto de Daewoo hace dudar de que éste se lleve finalmente a cabo, por la creciente oposición no sólo internacional, sino en la propia Madagascar, donde el acceso a la tierra es un tema muy sensible y donde miles de agricultores ocupan, todavía ilegalmente, fincas que fueron abandonadas por sus propietarios franceses tras la independencia de la isla.

Simon Mitambo, administrador de la ONG African Biodiversity Network, que agrupa a organizaciones conservacionistas y de defensa de las comunidades locales, explica la controversia sobre la compensación. "Lo hemos visto en varios casos en empresas de producción de biodiésel. Compensan con algo de dinero a los agricultores y éstos acaban emigrando a los barrios de chabolas de las grandes ciudades, sin tener nada que hacer", dice Mitambo desde Kenia, que recalca que en muchas ocasiones las empresas no aceptan terrenos bautizados como "marginales", sino que "buscan los más fértiles, con más agua (ocupados por pequeños agricultores), o, simplemente, áreas de bosque que convertir en terrenos fértiles tras desforestarlos. Eso ha pasado en Etiopía, por ejemplo".

Común a todas estas operaciones, la de Daewoo incluida, es su secretismo. ONG e



instituciones desconocen la totalidad de hectáreas compradas por foráneos en países pobres y a falta de que se publiquen estudios en curso, sólo pueden hacer estimaciones. De acuerdo con la ONG Grain para la promoción de agricultura sostenible, que ha publicado un estudio al respecto, China, con una población creciente y sin problemas de dinero (pero cuyo proceso de industrialización ha limitado su superficie agrícola y contaminado sus aguas), ha llegado, al menos, a 30 acuerdos de cooperación con Gobiernos asiáticos y africanos que le dan acceso a tierra para el cultivo de arroz, soja, maíz y biocombustibles a cambio de transferencia tecnológica y fondos de desarrollo. Sólo en África, tiene previsto crear 10 centros agrícolas en diversos países, y anima a sus empresas privadas a acudir al extranjero. La situación de los países del Golfo es diferente. En pleno desierto, sin tierra ni agua, son totalmente dependientes de las importaciones y ya tenían tradición, especialmente Qatar y Arabia Saudí, de comprar fincas en países musulmanes como Egipto o Sudán.

"Pero la tendencia va en aumento, son más los países del Golfo interesados, más la cantidad de tierra a comprar, y más los países donde comprar", explica Marie Bos, investigadora del Centro de Investigaciones del Golfo, que apunta que Pakistán y Brasil son dos países en los que se han comprado tierras, y que considera que África está en el punto de mira, "dado que, para muchos, puede ofrecer una solución tanto a corto como a largo plazo para esta crisis". Para Bos, los acuerdos entre los países del Golfo y los africanos, "deben ser mutuamente beneficiosos, asegurar la provisión de alimentos para los primeros y desarrollo de infraestructuras para los segundos de forma que el aumento de producción se destine tanto a la demanda local como a la externa".

De acuerdo con el estudio de Grain, las prácticas de los países del Golfo se suscriben y publicitan bajo esta estrategia de beneficio mutuo. Un provecho que, según David Hallam, debería ser perseguido con mayor insistencia. El responsable de la FAO cree que los países importadores "deberían preguntarse si realmente es necesario adquirir la tierra", dado que considera que hay otras posibilidades, como la formación de empresas conjuntas o la firma de contratos bilaterales equitativos con los países pobres que, "deben, por su parte, asegurarse de que las condiciones del acuerdo son beneficiosas, proporcionan empleo, transferencia tecnológica y se imbrican en la economía local". El experto apunta que la tendencia a comprar en los países pobres no va a declinar, "dado que las condiciones que la han creado no van a desaparecer a corto o medio plazo".

Fincas como inversión

Las firmas de inversión también participan del furor por la tierra. Ante la volatilidad de los mercados, buscan fondos seguros a través de la adquisición de fincas. Muchas están interesadas en comercializar cereales, pero también en la producción de biodiésel, muy controvertido. Si bien es sustituto "ecológico" del petróleo, el cultivo intensivo por grandes empresas, en países pobres y abriendo terrenos ganados a espacios naturales, (o adquiriendo tierras antes cultivadas por pequeños agricultores que pasan a ser jornaleros), tiene el efecto contrario al deseado, de acuerdo con muchas ONG que trabajan sobre el terreno.

Tan sólo en Tanzania, donde el Gobierno facilita tierras, más de media docena de firmas del Reino Unido, Suecia, Holanda, Japón, Canadá y Alemania (esta última con un proyecto para biodiésel de 200.000 hectáreas) han iniciado o iniciarán sus operaciones.



Pero no son sólo los biocarburantes los acicates a la presión comercial sobre la tierra. Según Michael Taylor, portavoz de International Land Coalition, los controvertidos créditos de carbono, surgidos a raíz del Protocolo de Kioto, con los que las empresas contaminantes pueden "comprar" su excedente de emisiones a industrias más limpias o sufragar proyectos ecológicos en países pobres, también contribuyen. Desde su instauración, el mercado financiero basado en estos créditos no ha dejado de crecer y mueve más de 2.000 millones de euros anuales.

"Se ha puesto valor comercial a los espacios naturales", explica Taylor, quien considera que el riesgo para los que usan la tierra sin disponer de títulos legales para ello va a incrementarse: pequeños agricultores, pastores nómadas, tribus indígenas.